

03

FORTALECIENDO

**LA TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA EN LA CONTABILIDAD
PÚBLICA: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS EN AMÉRICA LATINA**

FORTALECIENDO

LA TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS EN AMÉRICA LATINA

STRENGTHENING TRANSPARENCY AND ETHICS IN PUBLIC ACCOUNTING: CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN LATIN AMERICA

Janeth Paola Morocho-Marín¹

E-mail: janeth.morocho.70@est.ucacue.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0125-7019>

Myrian Alejandra Montero-Cobo¹

E-mail: miriam.monteros@ucacue.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8709-4457>

¹ Universidad Católica de Cuenca. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Morocho-Marín, J. P., & Montero-Cobo, M. A. (2024). Fortaleciendo la transparencia y la ética en la contabilidad pública: desafíos y perspectivas en América Latina *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 7(2), 30-41.

RESUMEN

La modernización de la contabilidad pública en América Latina es concluyente en un contexto globalizado y de crisis económica. Este estudio analiza la necesidad de adaptación a un entorno competitivo, resaltando las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público como herramientas esenciales para mejorar la gestión gubernamental. Se enfoca en la ética profesional y la transparencia en la gestión de recursos públicos, citando ejemplos de legislaciones y prácticas en América Latina. El objetivo es abordar los desafíos éticos en la contabilidad gubernamental mediante un enfoque integral que incluya la promoción de prácticas éticas, formación en valores, uso estratégico de la tecnología y participación ciudadana activa. La investigación concluye que estas medidas fortalecerán la transparencia y la integridad en la gestión de recursos públicos en América Latina, promoviendo una cultura ética sólida y sostenible en el sector público.

Palabras clave:

Contabilidad, ética profesional, corrupción, legislación, sector público.

ABSTRACT

The modernization of public accounting in Latin America is conclusive in a globalized context and economic crisis. This study analyzes the need to adapt to a competitive environment, highlighting the International Public Sector Accounting Standards as essential tools to improve government management. It focuses on professional ethics and transparency in the management of public resources, citing examples of legislation and practices in Latin America. The objective is to address ethical challenges in government accounting through a comprehensive approach that includes the promotion of ethical practices, training in values, strategic use of technology and active citizen participation. The research concludes that these measures will strengthen transparency and integrity in the management of public resources in Latin America, promoting a solid and sustainable ethical culture in the public sector.

Keywords:

Accounting, professional ethics, corruption, legislation, public sector.

INTRODUCCIÓN

La globalización y la crisis económica han llevado a los gobiernos a mejorar la competitividad y la calidad de los productos. La modernización de la contabilidad pública es esencial debido a la inevitable obsolescencia de los métodos tradicionales. Por esta razón, entre los principales países como Estados Unidos, Alemania, Singapur, Brasil, China, Sudáfrica, Australia están trabajando para actualizar sus sistemas de contabilidad pública, con el objetivo de hacer más eficientes sus procedimientos internos y fortalecer la gestión de sus economías. En este contexto, la administración pública se enfrenta a una constante demanda de asignación de recursos para la producción de servicios, lo que impulsa la búsqueda de una mayor efectividad y eficiencia en los procesos. Esto se refleja en un cambio del concepto de gobernanza hacia el de gestión. Además, se destaca la creciente importancia de la responsabilidad y transparencia, demandadas cada vez más por la sociedad. Esto implica la necesidad de proporcionar información precisa sobre los recursos financieros y otros aspectos (Martínez & Gastélum, 2021).

La teoría del control se basa en estos principios de regularidad financiera, legalidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Así, busca satisfacer las necesidades de información y asegurar que los fondos públicos se administren de forma adecuada. El sector público se caracteriza por tener sistemas, tales como: presupuesto, tesorería, contabilidad gubernamental y crédito público, que son vitales para los procesos nacionales de gestión y control financiero. Desde esta perspectiva, diversos factores, tecnologías, políticas institucionales y económicas, interactúan entre sí (Permuy & Vicente, 2021).

La contabilidad gubernamental no solo se limita a registrar transacciones monetarias y documentar eventos económicos de entidades gubernamentales; va más allá al establecer la implementación de un sistema integral con el propósito de facilitar la toma de decisiones y gestionar los recursos públicos de manera confiable. En armonía con esta perspectiva, la contabilidad financiera pública se configura como una técnica estratégica empleada para plasmar con precisión las actividades que generan un impacto económico en el sector público. Este proceso implica la generación sistemática y estructurada de información financiera, programática y presupuestaria. Permite llevar un registro y proporcionar información sobre la situación financiera (Pahlen & Campo, 2020).

A nivel internacional, se están llevando a cabo discusiones y la creación de modelos contables con el objetivo de garantizar la calidad y transparencia de la información contable pública. En este contexto, se han propuesto las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), también conocidas como IPSAS (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público). Estas normas establecen los requisitos para reconocer, medir,

presentar y revelar transacciones y hechos en los estados financieros con propósito general. En resumen, las NICSP ofrecen pautas internacionales para la presentación de información financiera aplicables a entidades públicas, en lo que respecta a los estados financieros (Muñoz et al., 2019).

La implementación de las NICSP representa un cambio significativo que transformará la manera en que se gestionan y presentan los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales. Este cambio no solo afectará la presentación de la información financiera, sino también la elaboración de otros informes, la medición de resultados, la toma de decisiones y el intercambio de información financiera. Al establecer reglas comunes, estas normas crean un marco que mejora la calidad de la información contable en el sector público.

Esto ayuda a que la información sea más consistente y proporciona a las personas una visión más completa y transparente de cómo funcionan las entidades gubernamentales, facilitando la toma de decisiones más informadas y permitiendo evaluar el desempeño no solo en términos financieros, sino también en aspectos sociales y ambientales. En resumen, promueve una gestión más completa y sostenible (Velásquez & Vidal, 2018).

Por las razones expuestas anteriormente, estas normas se convierten en una herramienta invaluable que impulsa la gestión eficiente de los recursos públicos, fomenta la comparabilidad de la información financiera, asegura una presentación transparente de los informes y facilita la creación de indicadores de decisión mediante estándares globalmente reconocidos. En este sentido, diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), desempeñan un papel importante al promover y orientar este proceso armonioso, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Zerpa et al., 2019).

En Ecuador, las normativas establecen lo que está permitido, por lo tanto, es relevante comprender el origen de la Contabilidad Gubernamental, que se remonta a la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado (CGE) del año 2002. En su artículo 13, esta ley define la contabilidad gubernamental como parte integral del sistema de control y le asigna la tarea de establecer y mantener en todas las instituciones del estado un sistema específico y único de contabilidad e información para los directivos. Este sistema vincula las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, basándose en los principios de contabilidad del sector público. Cubre las necesidades tanto operativas como para la toma de decisiones de los directivos y servidores de la entidad, de acuerdo con las normativas proporcionadas por el Ministerio de Finanzas para este propósito (Saeteros et al., 2020).

El Sector Público, desempeñan un rol esencial en la gestión de fondos públicos y en la administración de ingresos de la población. En este sentido, priorizar la generación puntual y precisa de información verificable se convierte en una necesidad apremiante. Este alcance no solo aclara las operaciones contables, sino que también contribuye a la transparencia y a una rendición de cuentas más responsable (Macías, 2018).

Al comparar la gestión pública con la privada, se destaca la obligación de exigir al Estado niveles de productividad más altos. Se concibe al ciudadano como un cliente con necesidades que deben ser atendidas de manera ágil y eficiente. Desde este punto de vista, se busca evaluar los resultados logrados por la gestión pública, la eficiencia en el uso de los recursos y el nivel de satisfacción ciudadana. En este escenario, surge la propuesta de vincular los conceptos de control y desempeño, considerándolos no como acciones independientes, sino como complementarias. Esto respalda la creación de un diseño institucional más flexible basado en estructuras de incentivos. El objetivo es encontrar el punto óptimo entre una mayor autonomía en la gestión operativa y el propósito institucional preestablecido.

Con el objetivo de medir el desempeño y evaluar la gestión pública de las entidades y dependencias basándose en resultados, se ha priorizado la consecución de una evaluación integral. Esta evaluación abarca la eficiencia, eficacia y productividad, integrando el gasto público, los programas y metas de los sectores con los objetivos y políticas gubernamentales clave. Estos esfuerzos se consideran como un mecanismo de dirección y evaluación del desempeño que busca instaurar una nueva cultura organizacional. Esta cultura se fundamenta en comportamientos alineados con las políticas y prioridades del sistema financiero público (González, 2019).

El control de gestión implica evaluar cómo las entidades gubernamentales administran sus recursos y llevan a cabo sus procesos para lograr eficiencia y eficacia. Esta evaluación se realiza mediante la revisión de los procedimientos administrativos, el análisis de indicadores de rendimiento y rentabilidad, y la identificación de cómo se distribuyen los excedentes y beneficios generados por estas entidades. Es esencial que el Estado cuente con una planificación estratégica, así como con parámetros e indicadores de gestión. Los encargados de diseñar e implementar estos instrumentos son los administradores de las instituciones públicas, quienes tienen la responsabilidad social de rendir cuentas y demostrar tanto su gestión como los resultados obtenidos. Por otro lado, los auditores gubernamentales desempeñan un papel vital al evaluar la gestión en términos de cinco aspectos clave, tal como se observa en la figura 1.

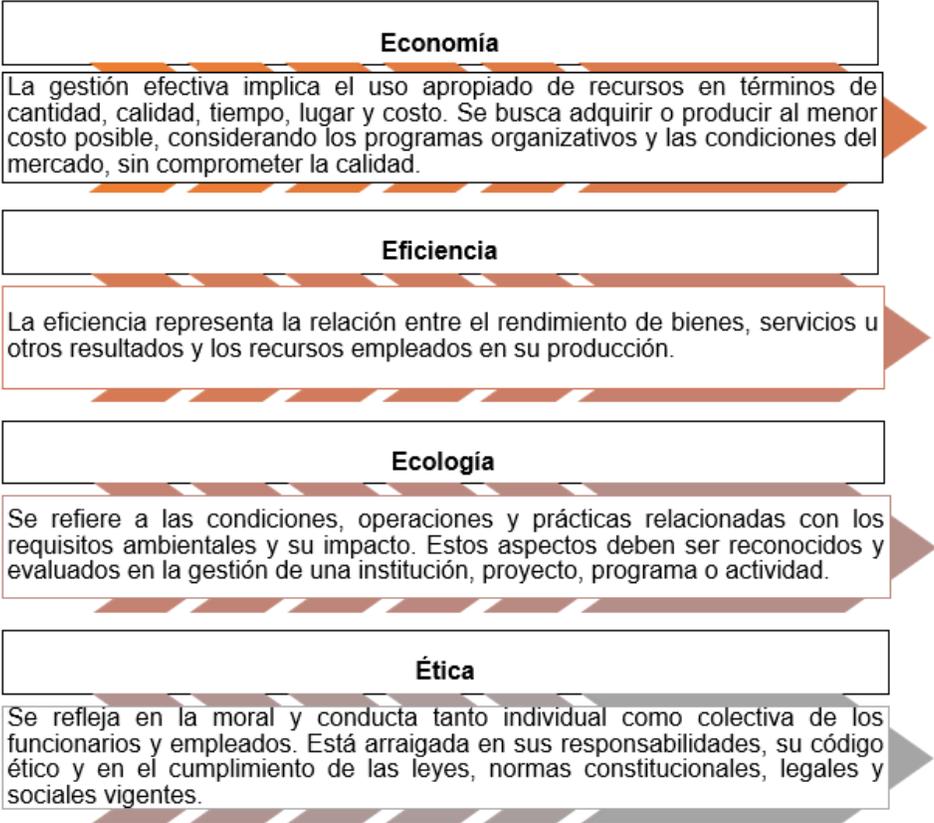


Figura 1. Evaluación de la gestión con los cinco E.

Fuente: Adaptado de Pibaque et al. (2022).

Con respecto al control interno, este se refiere al sistema que incluye la estructura organizativa y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, así como los mecanismos de verificación y evaluación que una entidad adopta. Su objetivo es asegurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones y la gestión de la información y recursos se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. Todo esto se realiza dentro de las políticas establecidas por la dirección y en conformidad con las metas u objetivos previstos (Toctaquiza & Peñaloza, 2021).

En el ámbito gubernamental, la corrupción se presenta cuando se desvían fondos públicos para beneficio personal. Este comportamiento ilegal causa problemas serios para la sociedad, como pobreza, pérdida de vidas y falta de desarrollo, en el ámbito de una educación de calidad. Además, afecta la capacidad de las personas para informar y denunciar a las autoridades, lo que contribuye a la impunidad. Detrás de los casos de corrupción, hay una red ilegal en la que participan políticos y profesionales financieros y legales. Estos individuos son responsables de desviar grandes cantidades de dinero y socavan la confianza del público en el sistema. Estos actos violan la ley y tienen un impacto negativo en la confianza de la sociedad, en sus instituciones y en la capacidad del país para avanzar hacia un desarrollo sostenible, justo y libre de corrupción (Barbosa et al., 2022).

El desafío actual es adaptar las organizaciones públicas al modelo de la era de la información. La modernización se enfoca en cambiar cómo se administra el gobierno y en la cultura de gestión, poniendo énfasis en la eficiencia, el liderazgo personal y los incentivos del mercado. Este enfoque implica reemplazar las antiguas estructuras y culturas burocráticas basadas en reglas por organizaciones más pequeñas, flexibles y centradas en las necesidades del usuario (Rodríguez et al., 2020).

Es necesario evaluar los riesgos en el gobierno y en las empresas para combatir la corrupción en un país donde es un problema común. Tanto en el gobierno como en las empresas, es importante tener en cuenta cosas básicas como formalizar contratos y manejar bien el dinero público. Estos aspectos están relacionados con seguir y aplicar las reglas que controlan cómo se hace la actividad económica, teniendo en cuenta cómo afecta a la sociedad y al medio ambiente. Por lo indicado, es una herramienta clave para fortalecer la honestidad y claridad en la gestión, ayudando a crear un entorno más ético y resistente contra prácticas corruptas. Al seguir normas contables y principios éticos, se contribuye a crear un ambiente propicio para combatir la corrupción tanto en organizaciones públicas como privadas. Esto ayuda a cambiar la idea de que la corrupción es beneficiosa, lo cual está lejos de la realidad, genera prácticas que afectan a la sociedad, debilitan la supervisión ciudadana y

la participación democrática, obstaculizan el crecimiento económico (Barbosa et al., 2022).

Conforme a la definición proporcionada por la Real Academia Española, la ética se constituye en un conjunto de reglas morales que orientan nuestra conducta en diversas esferas de la vida. Escobar, por su parte, la conceptualiza como la disciplina filosófica que profundiza en el estudio de cómo nos comportamos desde un punto de vista moral y social, bajo la perspectiva de Cortina (1994), la ética adquiere la dimensión de un conocimiento especializado, como un guía de nuestro carácter y en la toma de decisiones fundamentadas y certeras. Este enfoque ético, según Cortina, no solo nos brinda herramientas para la reflexión moral, sino que también actúa como un catalizador esencial para el desarrollo de una personalidad ética, capaz de discernir y actuar de manera coherente frente a los dilemas éticos que se presentan en la complejidad de la existencia (Hincapié & Torres, 2022).

En el ámbito de la ética y los valores, la contabilidad y la profesión contable enfrentan significativos desafíos, aunque es importante reconocer los avances realizados en la formulación y definición de buenas prácticas. Estas pautas emergentes constituyen un hito en el desarrollo de la profesión contable y sirven como herramientas que pueden simplificar la toma de decisiones éticas en este campo (Molina et al., 2018).

Se pueden distinguir tres niveles de ética organizacional que afectan la conducta de las empresas. En el primer nivel, se examina cómo los principios y valores éticos individuales influyen en la responsabilidad social corporativa. Esto implica la formalización de políticas y sistemas en áreas económicas, sociales y ambientales, junto con una divulgación transparente de resultados y un control externo. En el segundo nivel, se aborda la variabilidad ética entre las empresas. Algunas se destacan por su competencia ética, lo cual afecta la percepción pública y la lealtad con funcionarios públicos en el sector público. El tercer nivel explora si los valores institucionales o individuales determinan la clasificación como empresas responsables. Aquí, se destaca la importancia de comprender cómo los valores de la organización contribuyen a una identidad corporativa de responsabilidad social, influyendo en la percepción y confianza del público (Rendón et al., 2018).

Considerando lo antes expuesto, el problema de investigación se centra en ¿Cómo abordar de manera efectiva los desafíos éticos en la contabilidad gubernamental, destacando la importancia de la formación en valores y responsabilidad para garantizar la integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos? Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación radica en identificar y analizar prácticas y enfoques que fortalezcan la integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, destacando la importancia de la formación ética en profesionales contables y funcionarios gubernamentales.

METODOLOGÍA

En el estudio se empleó un método de investigación no experimental siguiendo la metodología propuesta por Hernández & Mendoza (2018), quienes profundizan en los desafíos éticos de la economía pública, enfatizando los valores y la responsabilidad. Esto permitió una investigación basada en el contexto que incrementó el conocimiento ético en la gestión de los recursos públicos. No se realizaron manipulaciones conscientes de variables durante el proceso de aprendizaje, por lo tanto, se centró en observar e interpretar situaciones y contextos reales, respetando el carácter no experimental del tema investigativo.

Se eligió un método cualitativo que demostró ser apropiado para explorar a fondo la ética en la gestión de recursos públicos. Este enfoque permitió captar la complejidad de las perspectivas y experiencias de los involucrados, apoyando a la expansión y enriquecimiento del entendimiento acerca de los aspectos éticos del ámbito estudiado.

Se aplicó una cobertura descriptiva-explicativa que facilita un análisis profundo e integral de los desafíos éticos en la economía estatal, con un enfoque especial en la formación valiosa y responsable. A través de análisis detallados y contextualizados, el objetivo fue describir la complejidad de estos desafíos, explorando las explicaciones y patrones subyacentes. Como resultado, contribuyó a una comprensión más completa y matizada de los aspectos éticos en el ámbito estudiado. Esta contribución proporciona una base sólida para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos.

Este trabajo de investigación se fundamentó en una finalidad transversal. Esta perspectiva permitió un abordaje exhaustivo del estudio, considerando la interrelación entre los distintos elementos y la transacción en sí misma. El objetivo general implicó prestar atención simultánea a múltiples dimensiones y variables, fomentando así una comprensión integral de los desafíos éticos en la contabilidad gubernamental. De esta manera, contribuyó a la identificación de relaciones y patrones en el área de estudio, enriqueciendo las interpretaciones y análisis pertinentes.

Asimismo, se emplearon los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético y comparativo, como parte de una estrategia metodológica integral. El método inductivo se utilizó para recopilar y analizar datos específicos, extrayendo conclusiones generales sobre los desafíos éticos en la contaduría pública. El método analítico - sintético se aplicó para descomponer la complejidad de los desafíos éticos en componentes manejables y sintetizar los resultados. Asimismo, el método comparativo fue esencial para analizar conflictos de prácticas éticas en distintos contextos administrativos, identificando similitudes y diferencias.

Este estudio empleó una técnica de revisión documental utilizando las principales fuentes de datos como Scopus, Redalyc y Scielo. Esta estrategia aseguró la utilización de bases de datos, garantizando la calidad y confiabilidad de las fuentes, y proporcionando una visión sólida de los avances y tendencias recientes en el área de estudio. La verificación documental se concibió como una herramienta clave para contextualizar y respaldar en lo teórico la investigación, asegurando la inclusión de estudios pertinentes y promoviendo el rigor metodológico del estudio.

DESARROLLO

En América Latina se han implementado diversas leyes con el objetivo de potenciar el acceso a la información y fortalecer la transparencia en la gestión gubernamental. En Argentina, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública no solo salvaguarda este derecho, también impulsa la participación ciudadana y establece la Agencia de Acceso a la Información Pública para su supervisión. Chile, mediante la Ley 20.285, regula la transparencia como un principio en la función pública, destacando su relevancia en la rendición de cuentas. México, al abordar el derecho a la información, lo considera como la piedra angular para el ejercicio de otros derechos, fomentando así la cultura de la transparencia y los derechos humanos. La Ley Peruana 27806 legitima el acceso a la información pública, resaltando su importancia en las políticas públicas y la racionalidad informativa. Colombia, a través de la Ley 1712, refuerza el derecho a la información, fundamentando los principios de máxima apertura, transparencia, no discriminación y uso responsable de la información, estableciendo así las bases esenciales para el ejercicio de este derecho en el ámbito público.

En Ecuador, la legislación sobre acceso a la información pública establece que este es un derecho humano, siendo responsabilidad del Estado protegerlo. La normativa también define la transparencia y rendición de cuentas como herramientas esenciales para supervisar la administración pública y garantizar la efectividad del control social. Como complemento a esta legislación, se han propuesto otros instrumentos normativos, entre los cuales destaca la directiva encargada de regular la atención de solicitudes de información. Este instrumento específico tiene como objetivo principal asegurar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes de acceso a la información pública presentadas por aquellos individuos que tienen la responsabilidad de conservar, administrar o generar información pública. Todo ello se realiza en concordancia con los estándares establecidos por la Constitución y la ley, fortaleciendo así los principios de transparencia y acceso a la información pública en el contexto ecuatoriano (Guevara, 2020).

En relación con el conflicto de intereses, los países de América Latina antes mencionados comparten una línea común de actuación, basada en el marco legal de

la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Esta normativa regula la conducta de los funcionarios públicos siguiendo el principio de probidad. Su objetivo principal es prevenir los conflictos de interés, estableciendo de manera estructurada la declaración de intereses relacionados con el desempeño de los servidores públicos, abarcando desde los niveles jerárquicos hasta los mandos intermedios. En este contexto, se destaca el caso de Perú, que ha implementado el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses. Este sistema agiliza y asegura la veracidad de la información pública, proporcionando orientación a la ciudadanía a través de material audiovisual y aplicando una organización sistemática de la información. El enfoque adoptado tiene como finalidad garantizar una transparencia eficaz, facilitando un acceso rápido y confiable a los datos relacionados en beneficio de la sociedad. Estos países han tomado medidas específicas para fomentar la transparencia y prevenir los conflictos de intereses en el ámbito de la función pública (Narváez et al., 2022).

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en Ecuador, en línea con la Constitución de 2008, responde a imperativos internacionales y busca garantizar el derecho a la información y una administración pública confiable. La LOTAIP establece cinco poderes para el Estado, incluyendo la transparencia y el control social, con el propósito de que los ciudadanos controlen el poder público mediante la participación activa. Esta legislación enfatiza el diálogo honesto, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, problemática común en la región latinoamericana. Garantiza el acceso de los ciudadanos a información generada en comunidades públicas o financiada por el gobierno, promoviendo la conciencia institucional y ciudadana sobre la importancia de la comunicación y preservación de la información. La LOTAIP impone estándares a organismos gubernamentales, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas estatales y privadas de interés público o con financiamiento estatal. El objetivo es eliminar, conservar y utilizar adecuado los recursos, protegiendo el bienestar de los empleados (De la Torre & Núñez, 2022).

Dentro del marco del acuerdo de libre comercio entre Chile y Colombia, se destaca la relevancia de la incorporación de principios internacionales de contratación pública. El énfasis recae en fortalecer la transparencia y equidad en los procesos de contratación pública. Esta medida implica una mejora en la selección de ofertas, estableciendo condiciones equitativas para los licitadores y asegurando una adjudicación imparcial y transparente, libre de cualquier influencia especial. De esta manera, se busca optimizar la eficiencia y confianza en las transacciones comerciales, promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo económico bilateral.

La divulgación de contratos y licitaciones en el ámbito de la contratación pública desempeña un rol valioso en la salvaguardia de la transparencia, la competencia y la eficiencia en este sector. En América Latina, se ha observado una marcada inclinación hacia la modernización de los procedimientos de contratación pública a través de la implementación de legislaciones destinadas a fortalecer la transparencia, fomentar la competencia y facilitar la participación de los proveedores mediante plataformas electrónicas.

En este contexto, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha brotado como un factor clave. Estas tecnologías permiten a las entidades contratantes difundir información de manera online, ampliando las oportunidades de negocio y perfeccionando la eficiencia y transparencia de los procesos de contratación pública. Herramientas específicas diseñadas para satisfacer las necesidades de las entidades compradoras, como portales de transacciones, subastas inversas, listas electrónicas y registros de proveedores, han contribuido a intensificar la competencia y optimizar la gestión de las adquisiciones públicas. En conjunto, estas innovaciones respaldan el objetivo de fortalecer la integridad y eficacia de la contratación pública en la región (Ascanio Pacheco, 2021).

La gestión de las compras públicas en Ecuador se sustenta en la implementación de normativas específicas, la planificación a través del Plan Anual de Contratación pública (PAC), la búsqueda de beneficios económicos mediante la mejora de las ofertas, y la integración de leyes y regulaciones para promover la transparencia y eficiencia en los contratos públicos. Este enfoque integral busca satisfacer las necesidades del Estado de manera efectiva, generando un impacto positivo en la economía y en la calidad de los servicios ofrecidos a la población (Reyna & Benítez, 2019).

Una de las prácticas clave que estimula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones administrativas públicas es la promoción de debates públicos, audiencias y mecanismos para recibir sugerencias ciudadanas en relación con políticas y proyectos gubernamentales. Estas acciones resultan esenciales para fomentar la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones y elevar la calidad de las políticas públicas. Los debates y consultas públicas ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus opiniones e inquietudes en torno a temas específicos. Estos encuentros permiten el intercambio de perspectivas y enriquecen el proceso al considerar diversas voces y puntos de vista. Además, los mecanismos de retroalimentación ciudadana constituyen una herramienta valiosa para recopilar información detallada sobre las necesidades y preocupaciones de la población.

En conjunto, estas prácticas promueven la participación ciudadana y también fortalecen los cimientos de la

democracia. Al asegurar que los ciudadanos tengan una plataforma para expresar sus opiniones y contribuir a la formulación de políticas, se garantiza que las decisiones gubernamentales y los proyectos respondan de manera efectiva a las demandas y realidades de la sociedad. Este enfoque integral contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a la creación de políticas más alineadas con las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía (Díaz, 2018).

Ética profesional en contabilidad gubernamental: un estudio comparativo

Se observa una notable diversidad en los enfoques legislativos adoptados por los países de América Latina en relación con la contabilidad gubernamental. Mientras algunos países han optado por un marco legal más detallado y específico, otros han preferido marcos más flexibles que permiten la adaptación a cambios en la gestión gubernamental. Esta diversidad refleja diferentes filosofías y estrategias para abordar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

La investigación detallada de la ética profesional en la contabilidad gubernamental en América Latina revela la prominente importancia atribuida a este aspecto para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos en la región. La existencia de códigos de ética específicos para el sector público en países como Argentina y Brasil refleja el compromiso con la promoción de prácticas contables éticas y la construcción de un entorno confiable para los ciudadanos. En el contexto argentino, el análisis del código de ética profesional emitido por el Consejo Profesional de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revela una detallada definición de los principios éticos que deben regir a los contadores que trabajan en el ámbito público. Principios como la honestidad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia profesional se presentan como piedras angulares que buscan no solo establecer un marco normativo sólido, sino también fortalecer la integridad en la contabilidad gubernamental en el país.

Por otra parte, en Brasil, el compromiso ético en la contabilidad gubernamental se destaca mediante el código de ética profesional establecido por el Consejo Federal de Contabilidad. Los principios éticos, alineados con los de Argentina, son delineados con claridad, buscando establecer una base ética sólida para orientar las prácticas contables en el ámbito gubernamental. Este enfoque no solo subraya la importancia de la integridad, sino que también demuestra el esfuerzo concertado por cultivar la confianza pública y asegurar la rendición de cuentas en la gestión financiera del sector público en Brasil.

La comparación entre estos dos casos revela similitudes notables en los principios éticos abordados, resaltando la convergencia en la percepción de los elementos esenciales que deben regir la contabilidad gubernamental. La

existencia de códigos de ética específicos y detallados en ambos países refuerza la idea de que la ética profesional es considerada un componente vital para la administración transparente y ética de los recursos públicos en América Latina. Este enfoque establece estándares éticos sólidos y sienta las bases para posibles iniciativas regionales de colaboración y mejores prácticas en el ámbito de la contabilidad gubernamental.

Se destaca que, tanto en Ecuador como en Chile, la ética profesional en el sector público se orienta de manera primordial hacia el aseguramiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. Estas naciones comparten el objetivo común de establecer un marco ético sólido que no solo guíe, sino que también fortalezca la integridad en el manejo de los recursos gubernamentales. En este contexto, ambas normativas no solo establecen principios éticos claros que deben regir la conducta de los auditores, sino que también delimitan con precisión las responsabilidades inherentes a su labor en la administración pública. Estos principios éticos, que incluyen la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, sirven como pilares que orientan las prácticas profesionales de los auditores en el sector público. Las responsabilidades delineadas reflejan el compromiso tanto con la preservación de la integridad financiera como con la promoción de estándares éticos elevados en la gestión de los recursos públicos.

La convergencia de objetivos entre Ecuador y Chile en la promoción de la ética profesional en el sector público determina la importancia atribuida a la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Este enfoque compartido refleja un compromiso compartido hacia la gestión ética de los fondos públicos y establece bases sólidas para la colaboración regional en la identificación y promoción de las mejores prácticas en materia de ética en la administración pública (Reyes et al., 2019).

En esta investigación, se destaca el impacto de los factores culturales y sociales en la contabilidad gubernamental y las prácticas éticas de los auditores en América Latina, abordando ante todo la situación en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Este aspecto resalta la interdependencia entre estos elementos y arroja luz sobre la influencia que ejercen en la configuración de los enfoques contables adoptados por los gobiernos y en el desarrollo de la ética profesional de los auditores en la región.

La combinación de ciertos modelos de gestión genera problemas, evidenciándose una ausencia de valores públicos en el aparato administrativo. Esta carencia ha desencadenado consecuencias graves para las instituciones administrativas públicas. Los resultados obtenidos destacan que la corrupción no solo compromete la eficacia de las instituciones públicas, sino que también socava la integridad y la confianza en el sector privado. La lucha contra la corrupción, demanda un enfoque integral que involucre a toda la sociedad, promoviendo la transparencia

yla ética tanto en el ámbito público como en el privado. Estos hallazgos dan paso a la comprensión profunda de la complejidad de la corrupción como un fenómeno social y abren la puerta a futuras investigaciones orientadas a desarrollar estrategias efectivas para su mitigación.

La carencia de valores públicos en los aparatos administrativos se revela como un factor que puede desencadenar consecuencias adversas para la administración pública. Esta investigación ha identificado dos consecuencias notables derivadas de esta falta de valores, a saber, problemas de corrupción y la cesión de la agenda pública, en primer lugar, la ausencia de valores públicos contribuye a la proliferación de problemas de corrupción en la administración pública. La falta de principios éticos y la desviación de los valores propician un entorno propenso a prácticas corruptas, comprometiendo la integridad y eficacia de las instituciones gubernamentales y, en segundo lugar, esta investigación evidencia que la carencia de valores públicos puede resultar en la entrega de la agenda pública a actores privados. La falta de un marco ético sólido abre la puerta a la influencia indebida de intereses particulares en la toma de decisiones gubernamentales, afectando la imparcialidad y la equidad en la gestión de los asuntos públicos.

Se logró identificar similitudes en varios países de América Latina, incluyendo a Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador. Estos países reconocen de manera unánime la importancia de la ética profesional del contador público en el ámbito de la contabilidad pública, entendiendo que esta es esencial para preservar la integridad y fomentar la confianza en los registros financieros.

De la misma manera, existen diferencias entre los países mencionados, en las cuales se establece que cada uno exhibe enfoques éticos únicos influenciados por sus propios contextos culturales y sociales. Estas diferencias pueden manifestarse en la interpretación de valores y enfoques ante dilemas éticos. La implementación de programas de formación ética puede variar según las estructuras gubernamentales y políticas específicas de cada país, reflejando las diferencias en las prioridades y enfoques de cada gobierno. La orientación de la formación ética hacia la inculcación de valores y principios adaptados a los desafíos específicos de cada país es más pronunciada en algunos lugares, reflejando una respuesta contextualizada a las demandas particulares (Lara & Dávila, 2022).

Innovaciones tecnológicas para mejorar la transparencia en la administración pública

Las innovaciones tecnológicas, sin duda, surgen como herramientas cuestionables y transformadoras para las instituciones públicas, enriqueciendo la gestión de recursos mediante un monitoreo eficiente y un control de acceso riguroso, respaldados por una administración precisa de registros contables. Este panorama de progreso

abarca una amplia gama de tecnologías avanzadas, desde la versatilidad de la computación en la nube hasta las potentes capacidades del **big data**, la inteligencia artificial, **blockchain** y la ciberseguridad. En este contexto, la administración estatal electrónica se consolida como un sistema más transparente y abierto, generando mejoras en los servicios públicos. Esta evolución, marcada por un énfasis sostenido en la transparencia, sirve como fundamento para la construcción de una administración inteligente y participativa.

Este nuevo paradigma exige la activa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones vinculadas a la gestión de los recursos públicos, fomentando así la colaboración ciudadana y consolidando una condición de control social a través de la construcción colectiva de la administración. Estas innovaciones tecnológicas, más allá de su objetivo inicial de eficientizar la administración pública, también se orientan hacia la garantía de la transparencia y la promoción activa de la participación ciudadana en procesos decisivos. Este avance representa un paso esencial en la reforma de la administración pública, otro punto es que establece un sendero hacia un sistema más moderno y equitativo. En este escenario, la transparencia y la colaboración ciudadana perduran como pilares esenciales en la construcción de una sociedad mejor gestionada y participativa (Barragán, 2021).

Se ha logrado identificar un conjunto de oportunidades para potenciar la transparencia en la administración pública. Entre las innovaciones destacadas, se encuentran las siguientes:

- Plataformas de datos abiertos: estas plataformas habilitan a las entidades gubernamentales para divulgar datos de manera accesible y reutilizable. Esta accesibilidad empodera a ciudadanos, empresas y otras organizaciones al permitirles utilizar esta información con diversos propósitos, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas.
- **Blockchain**: la tecnología **blockchain** ofrece la posibilidad de crear registros inmutables y transparentes de transacciones. Su aplicación se revela en concreto útil en ámbitos como las adquisiciones gubernamentales y la gestión de activos, asegurando niveles elevados de transparencia.
- Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos: La implementación de la inteligencia artificial y el análisis de datos posibilita la identificación de patrones, la detección de fraudes y la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Este enfoque contribuye de manera integral a fortalecer la transparencia en la administración.
- Gobierno electrónico: la adopción de sistemas electrónicos para la prestación de servicios gubernamentales se presenta como un catalizador para mejorar la transparencia. Proporciona un registro claro de las interacciones entre los ciudadanos y el gobierno,

consolidando así la transparencia en la prestación de servicios públicos (Schweinheim, 2020).

- **Gobernanza electrónica:** la evolución de la gobernanza electrónica ha posibilitado que los gobiernos ofrezcan información, trámites y servicios públicos a través de plataformas digitales, simplificando el acceso a la información y fomentando la transparencia de manera sustancial.
- **Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC):** las TIC han desempeñado un rol central al acercar a los gobiernos a los ciudadanos. Facilitan un acceso abierto a la información pública y contribuyen a la rendición de cuentas, generando así una mayor transparencia en la gestión gubernamental.
- **Acceso a la información:** las tecnologías han allanado el camino para un acceso más fluido a la información pública, empoderando a los ciudadanos para conocer y reportar las decisiones gubernamentales. Este acceso abierto promueve la transparencia y, a su vez, impulsa la participación ciudadana en los procesos administrativos.

Estas innovaciones tecnológicas han incidido de manera notable en la mejora de la transparencia de la administración pública. Han fortalecido la rendición de cuentas, democratizado el acceso a la información y estimulado la participación ciudadana en los procesos administrativos. En conjunto, representan un avance valioso hacia una gestión gubernamental más abierta, eficiente y orientada hacia las necesidades y expectativas de la ciudadanía (Osorio & Barreto, 2022).

Las innovaciones técnicas implementadas en la administración pública ecuatoriana reflejan un compromiso claro: mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana en todos los niveles gubernamentales. En este contexto, se resalta la capacidad inherente de estas herramientas para potenciar la transparencia en la gestión pública. El empleo estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no solo facilita la recopilación y entrega de información de manera más efectiva, sino que también contribuye a optimizar los procesos internos de toma de decisiones basados en datos, buscando así proporcionar servicios más eficientes a los ciudadanos.

En esta misma línea, se establece como una herramienta esencial para fortalecer la transparencia en la administración pública el uso consciente de las TIC. La gobernanza electrónica, conocida también como e-gobierno, representa un enfoque integral donde las TIC facilitan el acceso y la interacción de los ciudadanos, propiciando la mejora continua de los servicios gubernamentales. Esta estrategia garantiza de forma inmediata e interactiva la transparencia y la participación ciudadana y también, democratiza la gestión de la administración pública. La parte importante es en la erradicación de posibles focos de corrupción en el sector público, estableciendo así la transparencia, la participación ciudadana en la toma de

decisiones y la colaboración entre los diversos sectores como pilares esenciales de una administración abierta y eficaz (De la Torre & Núñez, 2023).

CONCLUSIONES

La globalización y la crisis económica han motivado a los gobiernos de países clave a mejorar la competitividad y la calidad de los productos. Esto ha llevado a una necesidad de modernización en la contabilidad pública, ya que los métodos tradicionales se vuelven obsoletos. La actualización de los sistemas contables es vista como esencial para hacer más eficientes los procedimientos internos y fortalecer la gestión de las economías.

La constante demanda de asignación de recursos para la producción de servicios ha llevado a un cambio en el concepto de gobernanza hacia la gestión. Existe una búsqueda constante de mayor efectividad y eficiencia en los procesos gubernamentales, reflejando la necesidad de adaptarse a un entorno globalizado y competitivo.

La creación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público es un paso significativo a nivel internacional. Estas normas buscan garantizar la calidad y transparencia de la información contable pública, estableciendo requisitos para reconocer, medir, presentar y revelar transacciones y hechos en los estados financieros. La aplicación de estas normas se percibe como un cambio transformador en la presentación de información financiera en el sector público.

La sociedad demanda cada vez más responsabilidad y transparencia en la gestión pública. La implementación de normativas como las NICSP contribuye a proporcionar información precisa sobre los recursos financieros y otros aspectos, promoviendo una gestión más completa y sostenible.

La corrupción se presenta como un problema grave en la gestión pública, perjudicando a la sociedad. La aplicación de normas contables y principios éticos se destaca como una herramienta clave para fortalecer la honestidad y la claridad en la gestión, contribuyendo a la creación de un entorno ético y resistente contra prácticas corruptas. Además, la formación ética en profesionales contables y funcionarios gubernamentales es esencial para abordar los desafíos éticos en la contabilidad gubernamental y garantizar la integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

En América Latina, diversos países han implementado leyes con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar el acceso a la información pública. Ejemplos como la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina, la Ley en Chile, y la Ley Peruana muestran un compromiso regional con la apertura gubernamental y la participación ciudadana.

La modernización de los procedimientos de contratación pública en América Latina se ha centrado en el uso de

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La implementación de plataformas electrónicas, subastas inversas y registros de proveedores ha contribuido a fortalecer la competencia, mejorar la eficiencia y garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública.

La ética profesional en la contabilidad gubernamental se destaca como un elemento esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos en América Latina. La presencia de códigos de ética específicos en países como Argentina y Brasil refleja un compromiso con la promoción de prácticas éticas, estableciendo un marco normativo sólido y fortaleciendo la integridad en la contabilidad gubernamental.

Para abordar de manera efectiva los desafíos éticos en la contabilidad gubernamental y garantizar la integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos en América Latina, es esencial implementar un enfoque integral. Esto implica el establecimiento y cumplimiento de códigos éticos específicos para el sector público, con mecanismos de supervisión y sanciones claras. La promoción de la formación en valores, tanto en la educación contable como en programas de capacitación continua, se presenta como un pilar primordial. Además, se destaca la importancia de incluir aspectos de responsabilidad social y ambiental en la formación contable. La adopción estratégica de tecnologías de la información, como inteligencia artificial y *blockchain*, fortalecerá la transparencia, mientras que la participación activa de la ciudadanía y la colaboración regional son clave. Para finalizar, el compromiso de los profesionales y organismos gubernamentales, junto con un enfoque en la responsabilidad y aprendizaje continuo, contribuirá a cultivar una cultura ética sólida y a mantener la integridad en la contabilidad gubernamental en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ascanio Pacheco, M. (2020). Principios de la contratación pública en el ámbito del acuerdo de libre comercio entre Chile y Colombia. *Revista Digital de derecho Administrativo*, (25), 337–369. <https://doi.org/10.18601/21452946.n25.11>
- Barragán Martínez, X. . (2022). Posmodernidad, gestión pública y tecnologías de la información y comunicación en la Administración pública de Ecuador. *Estado & Comunes*, 1(14). https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n14.2022.244
- De la Torre, S., & Núñez, S. (2023). Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador. *Estudios De La Gestión: Revista Internacional De Administración*, (14), 53–73. <https://doi.org/10.32719/25506641.2023.14.3>
- Díaz, A. (2018). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. *Gestión y Política Pública*, 26(2), 341-379. <https://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/ojs/cide/index.php/gypp/article/view/337/85>
- González, G. (2019). Prácticas de dirección y evaluación del desempeño en la administración pública federal. *Buen Gobierno*, 6, 171-185. <https://www.redalyc.org/pdf/5696/569660528008.pdf>
- Guevara, V. (2020). Transparencia y acceso a la información pública. El caso ecuatoriano. <https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/5327/GUEVARA%20VILLACRES%20VERONICA%20MARGARITA%20-%20ARTICULO%20CIENTIFICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hincapié, J. P., & Torres S, W. E. (2023). Importancia de la fundamentación ética en la formación de los estudiantes de Contaduría Pública: caso Univalle Palmira. *Criterio Libre*, 20(37). <https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2022v20n37.9569>
- Lara-Núñez, T. L., & Dávila-Toro, L. A. (2023). La Dicotomía de la Gestión Pública-Privada y las Transformaciones en la Administración Pública. *Economía Y Negocios*, 14(1), 84–99. <https://doi.org/10.29019/eyn.v14i1.1094>
- Macías, V. (2018). Transparencia presupuestal de las cuentas públicas de los municipios de Aguascalientes y Jesús María. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Narváez, J., Cuesta, L., Cleonares, A., & Gaviláñez, S. (2022). La administración pública en Ecuador. El conflicto de intereses desde su perspectiva actual. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 10. <https://dilemascontemporaneoseduccionpolitica-y-valores.com/index.php/dilemas/article/view/3340>
- Osorio, M., & Barreto, P. (2022). Transparencia pública: análisis de su evolución y aportes para el desarrollo del gobierno abierto. *Innovar*, 32(83), 17-34. <https://www.redalyc.org/journal/818/81870307003/html/>
- Pibaque, M., Peñafiel, J., & Alvarez, A. (2022). La contabilidad gubernamental como herramienta de gestión en la administración de los recursos públicos. *FIPCAEC*, 16.
- Reyes Reinoso, J. R., Reyes Cárdenas, N., & Cárdenas Muñoz, J. (2019). Contabilidad gubernamental y normas internacionales de contabilidad para el sector público ecuatoriano. *Revista Venezolana De Gerencia*, 24(88), 1179-1198. <https://doi.org/10.37960/revista.v24i88.30172>
- Reyna-Palacios, E. L., & Benítez-Astudillo, J. A. (2019). La contratación pública como mecanismo de ahorro en Ecuador. *Revista Científica FIPCAEC*, 4(4), 287-307.

- Schweinheim, G. (2020). Pueden producirse las innovaciones de la cuarta revolución tecnológica al interior de los sistemas de administración pública. CLAD Reforma y Democracia, 77. <https://www.redalyc.org/journal/3575/357566674003/html/>
- Toctaquiza, C., & Peñaloza, V. (2021). Control interno jurídico administrativo para la toma de decisiones en el sector público. Revista Dilemas Contemporáneos, 9. <https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2992>
- Velásquez Graciano, O., & Vidal Perez, J. (2018). Convergencia a normas internacionales de contabilidad para el sector público. Cuadernos de Contabilidad, 19(47), 24-59. 2-36. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-14722018000100024&script=sci_abstract&tlng=es